

Asunción, 08 de agosto de 2024

AFD/GA/UOC N° 158/2024

SEÑOR

DR. AGUSTÍN ENCINA, DIRECTOR NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRESENTE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en el marco de la comunicación del llamado a Menor Cuantía Nacional para el **“Soporte del sistema X-Adapter – SEGUNDO LLAMADO”** con ID N° 443184, a fin de aclarar el alcance de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario N° 1092/24 y reglamentado por la Resolución MITIC N° 275/24 conforme se explica a continuación:

La **Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”** en su art. 3. de su ámbito de aplicación, desglosa y clasifica la composición de los Órganos del Estado de la siguiente manera:

1. *Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias;*
2. *Banca Central del Estado;*
3. *Gobiernos departamentales;*
4. *Entes autónomos y autárquicos;*
5. *Entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas y **entidades financieras oficiales;***
6. *Universidades nacionales;*
7. *Consejo de la Magistratura;*
8. *Ministerio Público;*
9. *Justicia Electoral;*
10. *Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados;*
11. *Defensoría del Pueblo; y*
12. *Contraloría General de la República.*

En ese sentido, el art. 381 del Decreto N° 1092/24 *“Por el cual se reglamenta la Ley N° 7228 del 29 de diciembre de 2023, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024’*, el mismo es aplicable a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) **dependientes** del Poder Ejecutivo y a las Sociedades Anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, conforme se observa en la siguiente imagen:

Art. 381.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) **dependientes** del Poder Ejecutivo y las Sociedades Anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, previo al inicio de los procesos de contrataciones, independientemente de la fuente de financiamiento, deberán contar con la autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para los siguientes casos:

Se observa, que la normativa citada utiliza la palabra **“dependientes”** del Poder Ejecutivo, término que el Diccionario Jurídico del Autor “José Alberto Garrone” define como: *“En derecho, dependencia se refiere a la idea de dominio, reconocimiento de autoridad o poder, sujeción o subordinación.”*

De esta manera, la Ley 6769/2021 *“QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 2640/2005 “QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO”, Y SE ABROGA LA LEY N° 3330/2007* en su art. 1° menciona que la AFD **se relacionará** con el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda, situación que no constituye una dependencia, sujeción o subordinación al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que la AFD es una Entidad Financiera Oficial del Estado, persona jurídica de derecho público, dotada de autonomía y autarquía para la consecución del objeto social que la ley le asigna, que forma parte del sistema financiero y como tal, se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley N° 861/1996 *“GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO”* y su modificatorias Ley N° 5.787/15.

No obstante, cabe destacar, que el art. 25 inciso b) Ley N° 7278/24 no puede ser argumento para concluir que la AFD dependa del Poder Ejecutivo, pues, la citada Ley claramente legisla y busca evitar la duplicidad y superposición de funciones, responder a las necesidades de la población y satisfacer el contenido de los derechos, de conformidad con los fines Institucionales de las OEE, según al art.1° de la citada Ley. Claramente, la intención del legislador con la citada normativa es organizar las funciones de las OEE, pero siempre respetando su autonomía y no puede subsumirse arbitrariamente para la reglamentación del MITIC, que la misma se encuentran en “dependencia” del Poder Ejecutivo, ya que se estaría desvirtuando totalmente el objetivo de la citada Ley, pues ambas reglamentan cuestiones totalmente distintas.

Manifestamos que la presente situación de retener la publicación del proceso licitatorio, apela grandemente la satisfacción de la necesidad pública en detrimento del usuario final, que en el caso de la AFD, son los servicios y productos críticos que ofrece a una población vulnerable y a la ciudadanía en general, en línea a la política nacional de mejorar el acceso a una vivienda digna y fortalecer a las MYPIMES para el desarrollo nacional, situación que compromete el interés público, debido a que los servicios críticos que ofrece la AFD se verán afectados y no podrán seguir con su curso normal.

Por último, entendemos que la publicación del proceso licitatorio constituye un trámite administrativo de la DNCP efectuado con base a la verificación de las

documentaciones remitidas en el expediente, la cual no significa aprobación o convalidación de ningún acto administrativo emitido por tratarse de atribuciones propias e inherentes de esta convocante y reconocemos nuestra absoluta responsabilidad sobre la regularidad del proceso ante eventuales consecuencias en las condiciones establecidas.

De esta manera, habiendo realizado las aclaraciones correspondientes, remitimos nuevamente los documentos para la posterior publicación del proceso licitatorio.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

DIANA MARTINEZ
Administrador de Contrato

DIONICIO DOMÍNGUEZ
Coordinador Interino de la UOC